

Reseña a: Caminos, Pedro A. (2025). *Teoría e ideología constitucional: ensayos sobre interpretación, derechos, instituciones y democracia*. Praxis Jurídica Ediciones. ISBN: 978-631-90892-1-9, 316 páginas.

 **Gustavo Arballo**

Universidad Nacional de La Pampa, Argentina
arballo@gmail.com

Fecha de recepción: 15/04/2025

Fecha de aceptación: 16/10/2025

Identificador doi: 10.62169/rg.35.2974



1. Lo que hay de teoría en la ideología y lo que hay de ideología en la teoría

Para hacer una reseña de *Teoría e ideología constitucional* me interesa destacar como Pedro Caminos hace del título un etiquetado frontal muy acorde al contenido del libro, donde veremos ese vaivén deconstruido en finas hebras de argumentación política y de técnica jurídica.

Con lenguaje doctrinario, una teoría puede ostentar o presumir “pureza”, pero nunca es inmóvil o abstracta, porque nos llevará a una conclusión determinada y concreta. Así sucede, por ejemplo, con el positivismo metodológico que se pretende neutral, o con el originalismo que se disfraza de fidelidad textual: ambos terminan justificando posiciones políticas sobre el rol de los jueces, el poder del legislador o la legitimidad de la Constitución.

Por otro lado, cuando se debaten cuestiones como la legalización del aborto, la libertad de expresión o la regulación de los derechos sociales, los argumentos rara vez se presentan como convicciones morales desnudas; se formulan, en

cambio, como tesis jurídicas que apelan a la coherencia, a la integridad, a la consistencia institucional. La ideología se convierte en teoría para volverse respetable en el foro jurídico, y allí es donde la técnica analítica del jurista adquiere un valor decisivo: separar lo que es mera preferencia política de lo que puede justificarse como interpretación o construcción razonada del derecho.

En este cruce se revela la apuesta intelectual de Caminos: un trabajo minucioso, sistemático y analítico, que no teme sumergirse en la abstracción conceptual, pero que siempre busca volver al campo minado de los dilemas que habitamos. En el libro vemos entonces que cada discusión —sea sobre Dworkin, Alchourrón, Whittington o las corrientes neoconstitucionalistas— desemboca en un terreno de controversia práctica: el aborto, la libertad de expresión, la relación entre legisladores y jueces, las garantías constitucionales. Como apunta el interesante prólogo de Roberto Gargarella y su valoración de “cómo reencauzar una discusión descentrada”, Caminos tiende un puente sólido y bien transitable entre los debates locales y las discusiones conceptuales más álgidas de la teoría constitucional contemporánea.

En tiempos en que la práctica del derecho parece oscilar entre el decisionismo político y la disección formalista, Caminos recuerda que el jurista cumple una función insustituible: ordenar materiales, precisar conceptos, resolver antinomias y vaguedades: parafraseando a Alchourrón -visitado provechosamente en este libro- es un aprendiz en busca de un libro maestro. En este sentido, *Teoría e ideología constitucional* no solo aporta claridad conceptual, sino también una suerte de “manual de buena carpintería jurídica”, en el sentido que le daba Lon Fuller: un conjunto de reglas de método, de disciplina argumentativa y de cuidado sistemático que orientan al jurista en la difícil tarea de mantener coherencia en un ordenamiento plural, cambiante y atravesado por conflictos.

2. Un tutorial para la especificación de derechos

Se trata, en suma, de un libro valorable no solo por su riqueza intelectual, sino porque logra tender un puente entre el plano general de la teoría constitucional y los problemas específicos que definen la agenda jurídica contemporánea. Es ese tránsito —del concepto abstracto al dilema concreto— el que marca la impronta de Caminos y que justifica plenamente detenernos en la técnica de la especificación como el núcleo -entre muchos otros posibles- en el que haremos zoom esta reseña.

En efecto, me interesa destacar un hilo conductor de *Teoría e ideología constitucional*, que es el esfuerzo por traducir abstracciones teóricas en herramientas operativas para el trabajo del jurista. Entre todas las propuestas que despliega en el libro, la más fértil y distintiva es, sin duda, la técnica de la especificación de derechos. Con ella, Caminos enfrenta una de las tensiones centrales del derecho constitucional: ¿cómo hacer que los derechos, formulados enunciativamente de manera amplia y muchas veces vaga, adquieran contornos definidos que permitan su aplicación en contextos concretos?

La especificación parte de una crítica clara al absolutismo de los derechos. Según esta postura, un derecho como el derecho a la vida, la libertad de expresión o la igualdad tendría un alcance intocable, insensible a contextos o conflictos. Para Caminos, esa visión absolutista no solo es conceptualmente débil, sino que conduce a la parálisis práctica: si los derechos son absolutos, cualquier conflicto entre ellos se vuelve insoluble. El ejemplo es obvio: si el derecho a la vida es absoluto y el derecho a la autonomía también lo es, ¿qué hacer cuando colisionan? La respuesta absolutista suele ser dogmática, y en esa rigidez se disuelve la posibilidad de un razonamiento jurídico propiamente dicho.

Frente a esta visión, Caminos se inscribe en la tradición de Henry Richardson, quien propone pensar los derechos como especificados: no como esencias inmutables, sino como principios que se concretan a través de procesos

argumentativos, en diálogo con reglas, instituciones y contextos sociales. La especificación es, por tanto, un procedimiento técnico, no un mero acto político o dogmático, que exige articular principios con criterios normativos e institucionales de manera que el derecho gane operatividad.

La propuesta tiene varias implicaciones decisivas. En primer lugar, especificar no significa restringir, sino dar contenido: un derecho no especificado es apenas una promesa general, mientras que la especificación le otorga densidad y contornos, transformándolo en un derecho efectivamente exigible. Caminos distingue así tres niveles: los derechos no especificados, todavía enunciados abstractos; los derechos especificados, ya delimitados en sus condiciones de ejercicio y límites razonables; y el haz de derechos, cuando de un derecho se derivan diversas facultades, como ocurre con la libertad de expresión —que comprende informar, difundir y recibir información—.

En segundo lugar, la técnica se apoya en dos claves metodológicas: la conexión entre interpretación y construcción, que obliga al jurista no solo a leer lo ya dicho por el texto, sino a elaborar pautas nuevas en consonancia con la integridad del sistema; y la revisabilidad constante, porque la especificación nunca es definitiva, sino abierta a ajustes frente a nuevos contextos y argumentos. Lejos de ser un defecto, esta revisabilidad es lo que mantiene vivo al derecho como práctica íntegra.

Así, la especificación redefine el rol del jurista. Ya no es un mero repetidor de fórmulas normativas ni un moralista que busca imponer convicciones éticas personales. El jurista se convierte en un técnico que, con herramientas conceptuales y metodológicas, asegura que las especificaciones de los derechos sean consistentes, razonadas y compatibles con la integridad del ordenamiento. Su tarea consiste en conectar principios abstractos con instituciones concretas, procesando los conflictos sin caer en arbitrariedades ni en fórmulas vacías.

Caminos también muestra que la especificación permite responder a varias objeciones recurrentes. Quienes temen que la técnica pueda vaciar de contenido

los derechos, confundiéndola con restricción, reciben la respuesta de que especificar es, justamente, lo contrario: es evitar que los derechos se conviertan en proclamas huecas. A quienes objetan que la especificación es discrecional, Caminos replica que el ejercicio es racional en la medida en que se apoye en principios reconocibles, en precedentes consistentes y en un horizonte de integridad institucional.

3. Tres ejemplos de la técnica en acción

La riqueza de la técnica de la especificación propuesta por Pedro Caminos se aprecia con nitidez cuando se la observa aplicada a casos concretos. Allí se revela no solo como un recurso conceptual, sino como una herramienta capaz de ordenar debates jurídicos atravesados por tensiones políticas y morales profundas. Tres ejemplos, abordados en el libro, permiten ver su alcance: el principio interpretativo de prioridad local, el aborto, y la libertad de expresión.

El primer ejemplo es la disquisición sobre el concepto dworkiniano de prioridad local que aparece en el Capítulo I, que permite (y recomienda) reconocerle prioridad a los elementos que están más “cerca” del caso que debe resolver, permitiendo calibrar el funcionamiento de subsistemas específicos como el derecho laboral o el derecho de expropiaciones. Esto significa que, en lugar de aplicar principios generales de manera abstracta y uniforme, el juez debe atender primero a los valores y reglas propias del subsistema jurídico en cuestión y solo después, si es necesario, integrar con principios más generales. De este modo, la prioridad local no solo orienta la ponderación, sino que ayuda a ordenar los debates jurídicos atravesados por tensiones políticas y morales, haciendo que la decisión tenga un anclaje más sólido en la materia específica sin perder de vista los marcos constitucionales o axiológicos más amplios.

En el Capítulo III, en debate con García-Mansilla, Caminos enfrenta la postura absolutista que, en nombre del derecho a la vida, niega cualquier posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo. Aquí, la especificación de derechos permite

distinguir etapas de gestación, bienes jurídicos en juego y contextos normativos, sin negar la centralidad de la vida pero reconociendo la autonomía de las mujeres.

El tercer ejemplo se encuentra en el terreno de la libertad de expresión, materia del Capítulo VIII. Tradicionalmente concebida como casi absoluta, este derecho plantea dilemas cuando entra en conflicto con otros valores constitucionales, como la igualdad o la dignidad. Caminos propone aplicar la especificación para determinar en qué condiciones un límite a la expresión es compatible con la democracia y cuándo constituye censura ilegítima. De este modo, el jurista actúa como garante de la integridad: preserva el núcleo del derecho, pero lo articula con otros principios constitucionales para mantener la coherencia del sistema.

En los tres casos se aprecia la misma lógica: la especificación no vacía a los derechos, sino que los hace efectivos en escenarios complejos. Caminos logra mostrar que pasar de lo general a lo particular no es un mero ejercicio teórico, sino la condición misma de la práctica jurídica en sociedades democráticas.

4. Un particularista en busca de un libro maestro

Un caveat posible -y abordado en el libro- contra la técnica de la especificación es que, en su mismo esfuerzo por llevar los derechos al terreno de lo concreto, se expone al riesgo del particularismo (y, con ello, aceptar soluciones vertiginosamente casuistas). Cada especificación, necesaria para dar contenido operativo a un derecho, puede derivar en una solución localizada, dependiente de un contexto específico y de un intérprete puntual. El resultado es la fragmentación: un mosaico de microdefiniciones que, aunque razonadas, corren el peligro de disolver la coherencia general del sistema. En otras palabras, si el derecho se define caso por caso, ¿cómo evitar que pierda su carácter común, su pretensión de universalidad y su fuerza como lenguaje compartido?

De allí que sea valioso el capítulo que dedica el libro a establecer al legislador como actor central de la producción jurídica. Con ello, Caminos corrige el sesgo

judicialista que suele dominar el discurso constitucional contemporáneo, donde parece que todo se juega en los tribunales, y nos ofrece un antídoto frente al particularismo: la legislación, al formular normas de alcance general, devuelve al derecho la capacidad de articular soluciones comunes y de sostener la expectativa de igualdad ante la ley.

Allí, Caminos introduce una idea especialmente sugerente al postular (en una mirada alternativa, pero finalmente realista) que las leyes no se dirigen de manera inmediata a los ciudadanos en abstracto, sino a lo que denomina destinatarios institucionales —jueces, agencias administrativas, organismos de control, operadores jurídicos— que median entre el texto normativo y la vida social. La calidad de una ley, en consecuencia, no depende solo de la nobleza de su contenido político o moral, sino de su capacidad para habilitar a esos destinatarios a operar con eficacia, coherencia y previsibilidad. Esta perspectiva desplaza el foco desde la letra de la norma hacia la red institucional que la recibe, la interpreta y la ejecuta, recordando que el derecho no vive en los enunciados, sino en las prácticas -no erráticas, sino rigurosamente juridizadas- que logran sostenerlo.

En este itinerario, *Teoría e ideología constitucional* no se limita a señalar los huecos y puntos de fuga del derecho en sus visiones tradicionales, ni a explorar la fuerza gravitacional (re)organizadora de un libro maestro, ni tampoco a sumar una lúcida voz al debate académico sobre debates concretos —aunque todo ello lo logra con creces—. Su mérito mayor es metodológico: mostrar que pasar de lo general a lo particular, sin prevaricar en el intento, constituye la esencia misma del oficio jurídico.